HONORABLES MAGISTRADOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ – SALA PENAL

E. S. D.

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: ALFONSO MARTINEZ AREVALO

**ACCIONADO: FISCALIA 12 ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO POR MORA INJUSTIFICABLE DE SIETE AÑOS.**

SANDRA CONSUELO REYES VARGAS, Identificada con **C.C. No. 52.588.833 de Bogotá** y **T.P. No. 105.488 del C.S. de la J.**, correo electrónico sareyesjuridica@hotmail.com (Registrado ante el Consejo Superior de la Judicatura), apoderada del Dr. **ALFONSO MARTINEZ AREVALO**, dentro del proceso ejecutivo Hipotecario que cursa en el Juzgado 5° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias contra la **Sociedad Americana de Sistema Integrados** con radicado 2012 – 649, y apoderada también del Dr. Alfonso Martínez Arévalo ante la Fiscalía 12 de Extinción de dominio, respetuosamente presento ante su despacho **ACCION DE TUTELA** en contra de la **FISCALIA 12 ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS, POR UNA MORA INJUSTIFICADA DE SIETE AÑOS** sin decidir ninguno de los escritos de mi poderdante como tercero acreedor hipotecario de buena fe exenta de Culpa.

La injustificable mora de tantos años de la Fiscalía 12 en decidir los escritos de mi poderdante, vulnera sus **DERECHOS FUNDAMENTALES** al **DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA (Art. 29 C.N.) Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 228 y 229 C.N.)**, ya que no obstante haberse iniciado la investigación de extinción de dominio contra algunos bienes de personas naturales y jurídicas, entre ellos 2 inmuebles de propiedad de la **Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda. Nit. 830.056.815-8**, que están hipotecados a favor del Dr. Alfonso Martínez Arévalo, situados en la Calle 221 números 53-69 y 53-99 de Bogotá, desde el **SEIS (6) de Mayo de 2013**, a la fecha no ha tomado la FISCALÍA ninguna decisión sobre tales escritos DE MI PODERDANTE, ignorándolo por completo y de paso vulnerando sus derechos fundamentales.

Mi poderdante presentó a la Fiscalía 12 Especializada de Extinción de Dominio desde el 10 de Octubre de 2013 el primer escrito con el fin de oponerse a la Extinción de Dominio y para que se le reconociera como acreedor hipotecario de buena fe exenta de culpa de la Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda., para lo cual presento pruebas documentales idóneas y suficientes de su calidad de acreedor de buena fe exenta de culpa y muchos otros escritos y hasta la fecha la FISCALIA ni decide, ni ha cerrado la investigación, ni tampoco ha presentado la demanda de extinción de dominio, para que mi poderdante pueda ejercer sus derechos ante el juzgado de conocimiento y pueda demostrar una vez más, de ser necesario, que los bienes involucrados de propiedad de la Sociedad Americana de Sistemas Integrados, le fueron hipotecados mucho antes de iniciarse la investigación, y además pueda una vez más, de ser necesario, demostrar ante el Juez de conocimiento también, que es ACREEDOR HIPOTECARIO DE BUENA FE EXENTA DE CULPA y **solicitarle al Juez el desembargo de los 2 inmuebles que se le hipotecaron.**

También hay vulneración a su derecho fundamental al **Debido Proceso** porque la fiscalía ha excedido de manera injustificada el tiempo razonable para cerrar la investigación y para que presente la demanda de extinción de dominio, toda vez que se cumplieron exactamente el 6 de mayo de 2020, SIETE (7) años en dicho trámite, lo que constituye una MORA totalmente injustificable, que ha causado perjuicios a mi poderdante, sin que se le haya dado la oportunidad para defender su Acreencia Hipotecaria y recuperar el dinero prestado a la sociedad investigada.

La mora injustificada DE TANTOS AÑOS de la FISCALIA en cerrar la investigación o tomar una decisión, ha hecho que los perjuicios económicos que mi poderdante viene sufriendo por la investigación se agraven, porque la Sociedad de Activos Especiales S.A.S - "S.A.E. NIT. 900.265.408-3 administradora de los 2 inmuebles hipotecados a favor de mi poderdante por Americana de sistemas integrados Ltda. NIT: 830.056.815-8, ha venido recibiendo del inquilino o arrendatario de los 2 inmuebles a través de 2 de sus dependientes jurídicos o depositarios provisionales todos los arrendamientos causados desde el año de 2013, que hasta ahora valen \$ 290.000.000. y al parecer los 2 depositarios se apoderaron de ese dinero porque no han querido siquiera rendir cuentas de ese dinero, ni lo consignaron a ordenes del Juzgado 5° C.C. de Bogotá para el proceso ejecutivo hipotecario de mi poderdante contra Americana de Sistemas, como ordena el art. 52 del C.G.P., habiendo transcurrido ya 7 largos años de estar recibiendo dichos arrendamientos, que de acuerdo con los artículos 2023 y 2446 del Código Civil le pertenecen a mi poderdante y a su vez Acreedor Hipotecario.

Es necesario, por lo tanto, que se protejan los derechos fundamentales de mi poderdante, que amenazan perderse.

HECHOS

Mi poderdante radicó en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de Bogotá Zona Norte, el oficio No. 2.133 de Fecha Julio 22 de 2013, expedido por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, donde estaba cursando el proceso de **ejecución hipotecario de Alfonso Martínez Arévalo contra Sociedad Americana de Sistemas Ltda., con radicado No. 2012-649.**

la oficina de registro lo devolvió sin hacer el registro del embargo, informando que no lo podía hacer por estar embargado ya por la Fiscalía 12 especializada en extinción de dominio. (**Prueba No. 1: Oficio No. 2.133 expedido por el juzgado 14 C. Cto. Prueba No. 2: Certificado de tradición y Libertad.**)

2.- Al conocer el hecho de que el inmueble había sido embargado por la Fiscalía, mi poderdante acreedor hipotecario, presentó a dicho despacho (Fiscalía 12 Especializada) con **fecha 10 de Octubre de 2013** un memorial **oponiéndose a la Extinción de Dominio y manifestando que es un Tercero Acreedor de Buena Fe Exento de Culpa** y para demostrarlo presentó una gran cantidad de documentos como son los siguientes, que por su calidad son idóneos para demostrar su calidad de Acreedor de Buena fe exento de culpa: la Solicitud de Crédito, documentos de contabilidad de la Sociedad Americana de Sistemas solicitados para el estudio del préstamo, estados de cuenta de los impuestos de IDU y Prediales, copia de las declaraciones de renta de la sociedad de los periodos de 2009, 2010, 2011, recibos de Servicios Públicos de los inmuebles a hipotecar, Cámara de Comercio de la sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda., Certificados de Tradición de los Inmuebles a Hipotecar, Certificados Catastrales, Copia de las Escrituras Públicas de Compra-venta Nos. 4952b de 14 Junio de 2007 Notaría 27 de Bogotá, RUT de la Sociedad, Copia de los 8 Pagars firmados por el deudor Hipotecante Americana de Sistemas Integrados Ltda., Copia de la Escritura Pública de Hipoteca a favor de mi poderdante Alfonso Martínez Arévalo No. 709 de 20 de Junio de 2012 Notaría 31 de Bogotá, cuadro con detalle del desembolso de los dineros prestados, Carta firmada y autenticada del representante de la Sociedad autorizando la entrega de los dineros a Juan Pablo Piñeros, copias de los recibos de pago de impuesto predial e idu realizados por mi poderdante y Acreedor Hipotecario, copias de los cheques con los cuales se pagaron los impuestos prediales, copias de los cheques con los cuales se pagó el desembolso, se pidió igualmente oficiar al Juzgado 14 C. Cto., para que la fiscalía pidiera copias de la actuación surtida dentro del proceso ejecutivo hipotecario, todos los cuales se pueden ver anexos al memorial y dentro del expediente que se tramita en la fiscalía con radicado 11028 (**Prueba No. 3: Copia del memorial de fecha 10 de Octubre de 2013 por medio del cual el Acreedor Hipotecario se opone a la Extinción de Dominio.**)

3.- El apoderado del Dr. Alfonso Martínez presentó igualmente un memorial de **fecha 23 de Abril de 2014**, donde aporta la Sentencia dictada dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario (**Prueba No. 4: Copia del memorial de fecha 23 de Abril de 2014**).

4.- En vista del silencio de la fiscalía en resolver las solicitudes y avanzar en la investigación se presentó una nueva solicitud el **3 de Diciembre de 2014**, insistiendo en el reconocimiento de su calidad de Tercero Acreedor de Buena Fe exenta de culpa y en la **celeridad procesal** afianzado en el art. 20 de la ley 1708 de 2014 (**Prueba No. 5. Memorial del 3 de diciembre de 2014**).

Nota. - Tampoco decidió nada la Fiscalía.

5.- El **8 de Octubre de 2015** se presentó ante la Fiscalía 5ª de Extinción de dominio un Derecho de Petición para que oficiara a la Sociedad de Activos Especiales SAE a fin de que rindiera un informe de su administración (**Prueba No. 6. Copia del memorial de 8 de Octubre de 2015**).

6.- La Fiscalía 5ª especializada mediante oficio No. 20155400092991 de fecha 20 de noviembre de 2015 envió respuesta al representante judicial del Dr. Alfonso Martínez Arévalo, manifestando que el trámite del proceso en su fiscalía se encontraba en etapa de notificación de “Resolución de Inicio”, guardando silencio frente a la solicitud para que requirieran a la SAE. (**Prueba No. 7. Copia del oficio citado**).

Nota. En esa misma etapa de notificación de “Resolución de Inicio” esta desde el principio el proceso y así continúa.

7.- Con memorial de **29 de Octubre de 2015** se presentó un nuevo derecho de Petición a la Fiscalía 5ª para que se decidieran las solicitudes presentadas con anterioridad y requirieran a la SAE sobre la administración de los inmuebles bajo su custodia de propiedad de la Sociedad Americana de Sistemas Ltda. (**Prueba No. 8. Copia del memorial citado**).

8.- Con memorial de fecha **27 de Noviembre de 2015** nuevamente se insistió a la Fiscalía se decidieran todas las peticiones del doctor Alfonso Martínez, sin ningún resultado, (**Prueba No. 9. Copia del memorial citado**).

9.- En vista de la injustificable e inexplicable renuencia reiterada de la Fiscalía en decidir nada, absolutamente nada, se presentó otro nuevo memorial de fecha **14 de Enero de 2016** pidiendo a la Fiscalía que aplicara el Art. 20 de la ley 1708 de 2014 y por lo tanto imprimiera no solo celeridad al trámite sino también eficiencia y resolviera todas las solicitudes de mi poderdante (**Prueba No. 10. Copia del memorial citado**).

10.- Con memorial de fecha **26 de Enero de 2016** se aportó a la fiscalía copia del primer escrito, de fecha 10 de Octubre de 2013 para que se pronunciara al respecto y también pedía celeridad procesal (**Prueba No. 11. Copia del memorial citado**).

11.- La fiscalía mediante el oficio con radicado No. 20165400042191 de 11 de Mayo de 2016 informó a mi poderdante Dr. Alfonso Martínez, que se había dictado una Resolución en la que se informaba al Dr. Martínez que la Fiscalía cumplía con todas las etapas procesales señaladas en la ley y que su escrito de oposición se “tendrá en cuenta en el momento procesal oportuno” (**Prueba No. 12. Copia del oficio en cita**).

12.- El **16 de Noviembre de 2016**, se presentó un memorial solicitando a la Fiscalía que requiera a la Sociedad de Activos Especiales SAE para que rindiera cuentas de su Administración, había cuenta de que la SAE había sido renuente a dar información sobre los bienes que administraba de propiedad de la Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda. Como siempre la FISCALIA no decidió nada. (**Prueba No. 13. Copia del memorial citado**).

13.- Ante la inexplicable falta de actividad o pasividad total de la Fiscalía y la falta de pronunciamiento alguno frente a las solicitudes, se presentó ante la fiscalía 5ª de Extinción de Dominio otro nuevo memorial con fecha **17 de Mayo de 2019**, en donde le indicaba la violación clara de los derechos fundamentales y lo dispuesto por el Art.4º de la ley 270 de 1996 e igualmente se le informó que la SAE continuaba con su renuencia a dar algún informe sobre su administración de los inmuebles de propiedad de la Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda. Y se le insistió nuevamente a la fiscalía para que se pronunciara sobre esos puntos (**Prueba No. 14. Copia del memorial de fecha 17 de Mayo de 2019**). Dicho memorial corrió la misma suerte de la totalidad de los anteriores.

FUE TAMBIEN IGNORADO.

14.- Con fecha **19 de Septiembre de 2019** se presentó OTRO nuevo memorial a la fiscalía 12 de Extinción de dominio (A la que había retornado el expediente), en donde solicitaba se diera aplicación al Art. 20 de la ley 1708 de 2014 y se protegieran los derechos de mi poderdante el cual estaba siendo perjudicado económicamente no solo por la mora injustificada judicial sino por la renuencia de la SAE a rendir un informe detallado de las cuentas (**Prueba No. 15. Copia del memorial citado**). Como siempre la Fiscalía no se pronunció,

15.- Mediante auto de fecha 10 de Diciembre de 2019 la fiscalía 12 especializada manifestó lo siguiente para justificar su mora judicial, lo cual en ningún momento es una excusa válida para la alarmante e injustificada demora de 7 años en el trámite:

- Que a partir del 28 de Enero de 2019 había sido reubicado y a ello obedecía su demora
- Que adicionalmente le habían sido asignados 15 procesos adicionales a los que llevaba entre ellos el que es materia de la extinción de dominio a la Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda.
- Que del despacho asignado inicialmente se le ordenó reubicarse nuevamente en otro piso de la sede de Paloquemao.
- Finalmente dijo que daría traslado a la SAE para que entregara un informe detallado de los actos de administración. (**Prueba No. 16. Copia del auto de fecha 10 Diciembre de 2019**).

16.- Después de tantos años de silencio y falta de actividad de la Fiscalía y de haberse pronunciado el anterior auto, la Fiscalía no ha decidido nada. A la fecha de presentación de este escrito, señor Procurador, no se ha dado tampoco información alguna por parte de la SAE.

EN CUANTO A LOS HECHOS DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

Por simple vía de información manifiesto que los hechos del proceso ejecutivo hipotecario de mi poderdante **ALFONSO MARTINEZ AREVALO** que cursa en el Juzgado 5° C.C. de Bogotá contra Americana de Sistemas Integrados Ltda., con Radicado 2012 - 649 son los siguientes:

1.- El día 20 de Junio de 2012 la Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda. Nit. 830.056.815-8, por intermedio de su representante legal Sr. JAIME RAMIREZ QUIROGA y su Subgerente Sr. JUAN PABLO PIÑEROS BELTRAN, suscribieron ocho (8) pagarés por un valor total de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (300.000.000), pagaderos en Bogotá a favor de mi poderdante **ALFONSO MARTINEZ AREVALO**.

Estos pagarés están garantizados con Hipoteca Abierta de Primer Grado sin límite de cuantía, contenida en la Escritura Pública No. 709 del 19 de Junio de 2012 de la Notaría 31 de Bogotá, sobre los inmuebles identificados con M. I. No. 50 N – 329467 y 50 N – 309109 ubicados en la Calle 221 No. 53-69 y 53 – 99 de Bogotá; inmuebles que son de propiedad de la **Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda. Nit. 830.056.815 – 8. (Prueba No. 17 copia de la escritura pública de hipoteca).**

2.- Por estar la Sociedad deudora atrasada en el pago de los intereses, mi poderdante, **ALFONSO MARTINEZ AREVALO** se vio precisado a presentar la demanda Ejecutiva

Hipotecaria, la cual inicialmente fue de conocimiento del Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá con el radicado 2012 – 649 (**Prueba No. 18** Copia de la Demanda).

3.- La demanda fue presentada el 13 de Enero de 2013, y se le dio el trámite usual en este tipo de procesos, notificando a la parte demandada la cual dejó transcurrir en silencio su término para defenderse y posteriormente se dictó auto de **SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN** el 7 de Abril de 2014 (**Prueba No. 19** Auto de seguir adelante la ejecución).

4.- Una vez registrado el Embargo, se esperó respuesta para proceder al Secuestro del inmueble, pero esa respuesta no llegó, por lo que se compró un certificado de tradición en donde se observó que los inmuebles estaban embargados por la fiscalía 12 de extinción de dominio y fue de esa manera que mi poderdante se enteró que el inmueble tenía una medida restrictiva por parte de la Fiscalía 12 de Extinción de dominio, en razón a que los inmuebles son objeto de un proceso de extinción de dominio, del cual se está defendiendo, pues, mi representado es un **Tercero de Buena Fe Exenta de Culpa**. Sin embargo, no debió ser ese el medio para que el Acreedor Hipotecario se enterara, sino que debió ser la Fiscalía 12 quien notificara esa situación al Acreedor Hipotecario, pero ésta nunca lo hizo.

De otra parte, la Sociedad de Activos Especiales SAE no ha rendido cuentas de su administración, a pesar de que el Juzgado 5° Civil Circuito de Bogotá se lo ha exigido a esa entidad y a sus dos depositarios provisionales.

DERECHOS DEL TERCERO AFECTADO QUE HAN SIDO VULNERADOS

En primer lugar, debemos decir que se ha vulnerado el DEBIDO PROCESO y EL DERECHO DE DEFENSA por violación a lo dispuesto por el Art. 29 de la C. Nal. toda vez que la fiscalía lleva SIETE (7) AÑOS en la etapa investigativa y al parecer faltan otro tanto o tal vez más de años de investigación, lo cual conlleva además de la vulneración de los derechos antes citados, la vulneración del ACCESO A LA JUSTICIA en condiciones DIGNAS y JUSTAS y de respeto a la Dignidad Humana.

Mi poderdante no ha podido ejercer los siguientes derechos que le otorga la ley y por tanto existe una total vulneración del Derecho a la Defensa respecto a los siguientes derechos que contempla el código de extinción de dominio:

1.- El legislador quiso que el código de Extinción de Dominio fuera cuidadoso y garantista de los derechos de los terceros, y en ese sentido **el nuevo Código demanda que se realicen todas las acciones necesarias para identificar a los “posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en una causal de extinción de dominio”** (artículo 118.3 ley 1708 de 2014), **con el fin de garantizar todos los derechos que**

emanan de tal condición, pues es de recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 1° del Código de extinción de dominio, es la titularidad de un derecho sobre el bien pretendido la que sustenta la **legitimidad** para acudir al proceso en calidad de “afectado”, y en virtud de ello, le asisten todos los derechos y garantías que establece la constitución, la ley y este estatuto especial de Extinción de Dominio, como son los previstos en los artículos **13** (Derechos del afectado), **14** (personas en condición de vulnerabilidad), **58** (Derecho a ser notificado de la admisión de la demanda de extinción), **59 y ss.** (interponer Recursos), **82** (Interponer Nulidades), **89 (levantamiento de las Medidas)**, **116 Núm. 2°** (Ejercer el Derecho de Contradicción sobre la demanda de extinción y solicitar el pago de su Acreencia). Todos estos contemplados en la ley de extinción de Dominio, pero de igual manera **existen otros derechos** que le asisten al **TERCERO AFECTADO** previstos por la **Constitución** como es el **Art. 29** y el de Acceso a la Justicia, y otros como son los previstos en el **decreto 2136 de 2015**, que preserva los derechos de los **Terceros de Buena Fe exenta de culpa**, como es el caso de mi poderdante, que ha visto mermado sus derechos por la actuación irregular de los administradores de los inmuebles hipotecados, en razón a que desconoce si en realidad se ha estado administrando debidamente los inmuebles hipotecados al demandante y que se ha hecho los dineros productos de dicha administración. De igual manera el Acreedor Hipotecario puede y debe ser el primero al que se le debe ofrecer los inmuebles, pero parece que ni siquiera el Administrador de los inmuebles sabe o conoce quien es el Acreedor Hipotecario.

Precisamente el Art. 2.5.5.3.3.1 del decreto citado dispone:

*“Artículo 2.5.5.3.3.1. Derechos de terceros. En caso de que la providencia judicial ejecutoriada y en firme que declare la extinción de dominio de un bien **reconozca sobre el activo derechos parciales a favor de un tercero de buena fe, el Administrador del Frisco podrá ofrecer en primer término a dicho tercero el bien objeto de extinción,** quien tendrá la opción de aceptarlo por el valor del avalúo comercial cancelando la diferencia por el mismo.*

En ningún caso el Administrador del Frisco está obligado a reconocer un valor superior al producto de la venta del bien, previa deducción de los gastos que esta implique y el pago de las obligaciones, incluido el avalúo comercial.

*En la oferta el Administrador del Frisco debe indicar: i) el avalúo comercial del bien; ii) **que el mismo se ofrece en dación en pago** y; iii) la advertencia de que si no se recibe una respuesta dentro del mes siguiente a la fecha de remisión de la oferta, se entenderá que no existe interés en dicha forma de pago, en cuyo caso se procederá a la venta como se indica en el presente título” (Subrayado y Negrilla fuera de texto).*

El decreto 2136 de 2015, también concede al Acreedor Hipotecario de un Derecho para prevenirlo de una pérdida total o parcial del bien:

“Artículo 2.5.5.2.4. Garantías. Las personas, a quienes el Administrador del Frisco les entregue bienes utilizando cualquiera de los mecanismos de administración señalados en el artículo 2.5.5.2.2 del presente capítulo, una vez aceptada la designación y previo a la entrega del bien a administrar, deberán constituir las garantías tendientes a preservar el buen ejercicio de la designación efectuada para la gestión de los bienes. Las características técnicas de estas garantías se determinarán en la metodología de administración” (Negrilla y Subrayado fuera de texto).

Esa garantía parece no haber sido exigida y cuando el Acreedor Hipotecario ha solicitado información al respecto no ha sido escuchado, lo que puede causar la pérdida de la garantía hipotecaria.

EL Art. 89 de la ley de extinción de dominio también ha sido vulnerado por la FISCALIA en perjuicio de los Derechos PREFERENCIALES que tiene el Acreedor Hipotecario, pues las medidas:

“ARTÍCULO 89. MEDIDAS CAUTELARES ANTES DE LA DEMANDA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Excepcionalmente, el Fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento.” (Negrilla y Subrayado fuera de texto).

En el presente asunto ni se han levantado las medidas, ni se ha archivado la actuación ni tampoco se ha presentado la demanda de extinción de dominio, con claro perjuicio para el Acreedor, y parece que en esta fiscalía también hace carrera el concepto de que los juicios de Extinción de Dominio son Eternos en Colombia.

En virtud de lo dispuesto por el art. Citado, deberían a la fecha estar levantadas las medidas cautelares, sin embargo, no lo están, lo cual constituye un claro desconocimiento de la ley con perjuicio de mi poderdante, dada la negligencia de la fiscalía.

De todo lo expuesto es posible concluir que, en el presente asunto, mi poderdante, que es el Tercero afectado por ser Acreedor Hipotecario de buena fe Exenta de Culpa, **ALFONSO MARTINEZ AREVALO** le han sido vulnerados todos y cada uno de los derechos que le otorga la constitución y la ley.

DEBERES DE LOS JUECES FRENTE AL TRAMITE PROCESAL

En la Sentencia **SU394/16** siendo magistrada ponente la Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO la Corte Constitucional dijo lo siguiente:

“El Legislador estatutario desarrolló el mandato constitucional y dispuso que: i) la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento, ii) los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales y iii) la violación injustificada de dichos plazos constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar

Asimismo, el Código General del Proceso prevé como primer deber del juez dirigir el proceso, velar por su rápida solución y adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación, así como procurar la mayor economía procesal”

En el asunto que nos ocupa, mi poderdante ha tenido una conducta procesal activa y la parálisis o la dilación no es atribuible a su conducta.

Por su parte, el Estado representado en este caso por la fiscalía, tiene la obligación de garantizar la debida diligencia en la adopción de sus decisiones y de observar los términos procesales, cosa que no ha hecho.

EL PLAZO RAZONABLE COMO ELEMENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.

Al respecto la Sentencia de la Corte constitucional SU – 394/16 indica lo siguiente:

“Uno de los deberes que impuso el Constituyente a las personas que conviven en el Estado Social de Derecho fue el de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”¹, esto implica, que una vez la autoridad judicial ordena la intervención de una persona ya como demandado, investigado, tercero, interesado, etc., ésta debe atender, sin demora, los requerimientos que haya establecido el ente jurisdiccional”.

De otra parte, en igual sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-030 de 2005 magistrado ponente JAIME CORDOBA TRIVINO dijo lo siguiente:

“la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos.

Así lo entendió el Legislador al expedir la Ley 270 de 1996– Estatutaria de la Administración de Justicia –donde se señalaron una serie de principios que rigen la administración de justicia, entre ellos la celeridad (art. 4) la eficiencia (art. 7) y el respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso (art. 9)”.

A efectos de evaluar la afectación a los derechos fundamentales al **debido proceso** y al **acceso a la administración de justicia** ha de distinguirse entre el mero retardo en la observancia del

término y la *mora judicial injustificada*, la cual se estructura a partir de los elementos descritos en la **Sentencia T-230 de 2013** de la Corte Constitucional así:

- “a) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;
- b) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y
- c) la tardanza es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial.

Sobre este último elemento para estructurar la *mora judicial injustificada*, debe recordarse que desde la **Sentencia T-030 de 2005**, la Corte señaló que ante la imposibilidad de dictar las providencias a su cargo en los plazos previstos por el Legislador, el magistrado, juez o fiscal debe informar a quien interviene en el proceso sobre las medidas utilizadas y de las gestiones realizadas para evitar la congestión del despacho judicial, así como de las causas que no permitieron dictar una decisión oportuna.

Lo anterior, por cuanto los interesados en la actuación procesal *“tienen derecho a conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”*.

Lo anterior, como desarrollo de los deberes de los funcionarios judiciales contenidos en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996 que les impone entre otros:

- 1) respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos;
- 2) desempeñar con celeridad las funciones a su cargo.
- 3) poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio.
- 4) resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

Desde esta perspectiva, para determinar si en un caso concreto se ha observado un plazo razonable la jurisprudencia constitucional ha acogido los tres elementos aplicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a saber: *i)* la complejidad del asunto; *ii)* la actividad procesal del interesado; y *iii)* la conducta de las autoridades públicas.

Añade la corte en la sentencia SU 394/2016 lo siguiente:

“La irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administración de justicia en el componente del derecho a obtener una decisión judicial. No basta con estar en presencia de una autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la

situación para que haya pleno acceso a la jurisdicción”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El contenido de este derecho se ha identificado en los siguientes términos

"el acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.”²

De igual manera, se ha señalado que este derecho:

“no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley”, por cuanto lo contrario “implicaría que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podrían, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el artículo 123 de la Carta Política en cuanto dispone que los servidores públicos, y dentro de esta categoría los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley o el reglamento”³.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia con claridad establece que:

“(…) El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…)”

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-641/02 afirmó que:

“El debido proceso exige de las autoridades públicas la sujeción de sus actuaciones a los procedimientos previamente establecidos, ajenos a su propio arbitrio y destinados a

preservar las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la ley.

El derecho de defensa es una garantía en un Estado Social de Derecho y en un Estado Democrático por lo que no puede sustraerse el cumplimiento de este derecho fundamental”.

Derecho que considero vulnerado a mi poderdante doctor Alfonso Martínez Arévalo, en primer lugar, porque los juzgados accionados no han dado cumplimiento a una entrega que ordena la ley sobre los bienes adjudicados en remate y de otra parte, porque una vez impartida la orden de entrega, el juzgado 26 C.M. se ha negado a cumplirla sin justificación alguna, lo que le ha causado graves perjuicios económicos.

PROCEDENCIA DE LA TUTELA

La Constitución Política, en su artículo 86, incorpora la acción de tutela como un mecanismo judicial de carácter preferente y sumario, diseñado para proteger de forma inmediata los derechos fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por parte de cualquier autoridad pública, y excepcionalmente por particulares, como consecuencia de sus acciones u omisiones.

De los hechos anteriormente expuestos se concluye que el único camino para defender los derechos fundamentales vulnerados a mi poderdante es la Tutela.

La exagerada e injustificada demora en la fiscalía en decidir, ha sido considerada como una violación al debido proceso que amerita la acción de tutela.

PRUEBAS

Aporto las siguientes **DOCUMENTALES**:

Prueba No. 1: Oficio No. 2.133 expedido por el juzgado 14 C. Cto.

Prueba No. 2: Certificado de tradición y Libertad de los inmuebles de propiedad de Americana de Sistemas Integrados Ltda. E hipotecados al doctor Alfonso Martínez Arévalo en donde consta la Hipoteca y el embargo de la fiscalía.

Prueba No. 3: Copia del memorial de fecha 10 de Octubre de 2013 por medio del cual el Acreedor Hipotecario se opone a la Extinción de Dominio.

Prueba No. 4: Copia del memorial de fecha 23 de Abril de 2014 aportando la Sentencia dictada dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario.

Prueba No. 5: Memorial del 3 de diciembre de 2014 insistiendo en el reconocimiento de su calidad de Tercer Acreedor de Buena Fe exenta de culpa y en la celeridad procesal afianzado en el art. 20 de la ley 1708 de 2014.

Prueba No. 6. Copia del memorial de 8 de Octubre de 2015. Derecho de Petición presentado a la fiscalía para que oficiara a la Sociedad de Activos Especiales SAE a fin de que rindiera un informe de su administración.

Prueba No. 7. Copia de la respuesta que La Fiscalía 5ª especializada envió al representante judicial del Dr. Alfonso Martínez Arévalo de fecha 20 de Noviembre de 2015 manifestando que el tramite del proceso en su fiscalía se encontraba en etapa de notificación de “Resolución de Inicio”, guardando silencio frente a la solicitud para que requirieran a la SAE.

Prueba No. 8. Copia del memorial de 29 de Octubre de 2015 que contiene un derecho de Petición a la Fiscalía 5ª para que se decidieran las solicitudes presentadas con anterioridad y requirieran a la SAE sobre la administración de los inmuebles bajo su custodia de propiedad de la Sociedad Americana de Sistemas Ltda.

Prueba No. 9. Copia del memorial de fecha 27 de Noviembre de 2015 que nuevamente insistió en la Fiscalía sobre la resolución de todas las peticiones presentadas.

Prueba No. 10. Memorial de fecha 14 de Enero de 2016 pidiendo a la Fiscalía que aplicara el Art. 20 de la ley 1708 de 2014 y por lo tanto imprimiera no solo celeridad al trámite sino también eficiencia y resolviera todas las solicitudes anteriores.

Prueba No. 11. Copia del memorial de fecha 26 de Enero de 2016 con que se aportó a la fiscalía copia del primer escrito, de fecha 10 de Octubre de 2013 para que se pronunciara al respecto y también pedía celeridad procesal.

Prueba No. 12. Copia del oficio No. 20165400042191 de 11 de Mayo de 2016 por medio del cual la fiscalía informó a mi poderdante Dr. Alfonso Martínez, que se había dictado una Resolución en la que se informaba que la Fiscalía cumplía con todas las

etapas procesales señaladas en la ley y que su escrito de oposición se “tendrá en cuenta en el momento procesal oportuno”

Prueba No. 13. memorial de 16 de noviembre de 2016, solicitando a la Fiscalía que requiera a la Sociedad de Activos Especiales SAE para que rindiera cuentas de su Administración.

Prueba No. 14. Copia del memorial de fecha 17 de Mayo de 2019, en donde le indicaba a la fiscalía la violación clara de los derechos fundamentales y lo dispuesto por el Art.4º de la ley 270 de 1996 e igualmente le informe que la SAE continuaba con su renuencia a dar algún informe sobre su administración de los inmuebles de propiedad de la Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda. Y le insistí nuevamente a la fiscalía para que se pronunciara sobre esos puntos.

Prueba No. 15. Copia del memorial de fecha 19 de Septiembre de 2019 a la fiscalía 12 de Extinción de dominio (Que había retomado la investigación), en donde solicitaba se diera aplicación al Art. 20 de la ley 1708 de 2014 y se protegieran los derechos de mi poderdante el cual estaba siendo perjudicado económicamente no solo por la mora judicial sino por la renuencia de la SAE a rendir un informe detallado de las cuentas

Prueba No. 16. Copia del auto de fecha 10 Diciembre de 2019 por medio del cual la fiscalía 12 especializada manifestó sus excusas para justificar la Mora.

Prueba No. 17 copia de la escritura pública de hipoteca Escritura Pública No. 709 del 19 de Junio de 2012 de la Notaría 31 de Bogotá, sobre los inmuebles identificados con M. I. No. 50 N – 329467 y 50 N – 309109 ubicados en la Calle 221 No. 53-69 y 53 – 99 de Bogotá; inmuebles que son de propiedad de la Sociedad Americana de Sistemas Integrados Ltda. Nit. 830.056.815 – 8

Prueba No. 18 Copia de la Demanda Ejecutiva Hipotecaria.

Prueba No. 19 Auto de seguir adelante la ejecución Hipotecaria.

PETICIONES

Conforme a todo lo expuesto y para proteger los Derechos Fundamentales de mi prohijado, con todo respeto solicito al señor Juez:

1.- **Decretar el Levantamiento de las medidas cautelares en virtud de lo dispuesto por el Art. 89 de la ley 1708 de 2014** (Código de Extinción de dominio).

2.- Que se ordene a la fiscalía 12 Especializada de Extinción de Dominio que se respete el DEBIDO PROCESO , el DERECHO DE DEFENSA y ACCESO A LA JUSTICIA del Dr. ALFONSO MARTINEZ AREVALO, y en consecuencia se ordene o el ARCHIVO DEL PROCESO respecto de los bienes de AMERICANA DE SISTEMAS INTEGRADOS LTDA que se encuentran hipotecados a favor de ALFONSO MARTINEZ AREVALO o en su defecto se pongan a disposición del juez de conocimiento de extinción de dominio para ejercer el derecho de defensa en ese Despacho Y PEDIR EL DESEMBARGO DE LOS DOS BIENES RAICES HIPOTECADOS.

3.- Ordenar a la fiscalía 12 Especializada de Extinción de Dominio que se respeten los plazos establecidos por la Constitución y la ley.

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

De manera expresa me permito comunicar a su despacho que no he promovido antes, otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.

NOTIFICACIONES

1) La suscrita accionante en mi oficina de la Calle 110 No. 9 – 25 of. 9-17 del edificio Pacific Rubiales de Bogotá. D.C. correo electrónico sareyesjuridica@gmail.com

2) Mi poderdante en la Calle 110 No. 9 – 25 of. 9-17 del edificio Pacific Rubiales de Bogotá. D.C. correo electrónico alfonmar@hotmail.com

3) La fiscalía 12 de extinción de dominio y lavado de activos, en el bunker de la Fiscalía, diagonal 22 B No. 52 – 01 Edificio F piso 4 de Bogotá, correo electrónico jose.acerofiscalia.gov.co

Atentamente,

SANDRA CONSUELO REYES VARGAS

C.C. No. 52.588.833 de Bogotá

T.P. No. 105.488 del C.S. de la J